

UNA ESTRATEGIA PARA AMERICA LATINA EN LOS 90

PRESENTACION

En mayo de 1980, en vísperas de la Administración de Ronald Reagan, el llamado Comité de Santa Fe hizo público un Informe - el Informe de Santa Fe I - que contenía una evaluación de la situación latinoamericana de entonces y un conjunto de recomendaciones para que el gobierno norteamericano formulara su política hacia América Latina. Ese Informe sirvió de guía en varias ocasiones para orientar muchas de las principales decisiones políticas de Estados Unidos en nuestra región.

Hoy, en los inicios de la Administración de George Bush, de nuevo el Comité de Santa Fe elabora y publica su análisis y las correspondientes recomendaciones sobre la situación de nuestro continente. Este trabajo, diseñado por el mismo equipo intelectual de Santa Fe I, asegura la continuidad de aquel análisis y persevera en soluciones similares para los problemas que aquejan a nuestros países. El presente documento -"Una estrategia para América Latina en los 90"- es muy revelador. Muestra los alcances del pensamiento conservador norteamericano con respecto a Latinoamérica y, lo que es muy importante, revela la forma en que muchos influyentes ideólogos norteamericanos perciben los problemas de América Latina y sus posibles soluciones.

El área centroamericana en la cual estamos ubicados ocupa un lugar primordial en la agenda política latinoamericana de la actual Administración Bush. El Informe de Santa Fe II contiene muchas referencias concretas a esta región. Es importante conocerlas y analizarlas.

Por estas razones, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) ha decidido publicar el texto completo del Informe de Santa Fe II y ponerlo al alcance de nuestros lectores. Estamos seguros que su estudio cuidadoso servirá para comprender mejor las razones últimas de la política norteamericana en el área y sus consecuencias directas sobre la realidad de cada uno de nuestros países.

En el caso concreto de Honduras, la influencia de la política norteamericana en su desarrollo económico y político es cada vez mayor. Por lo tanto, el análisis y la interpretación adecuados de esa política adquieren una importancia muy grande. La lectura de este documento servirá mucho a quienes estamos interesados en defender la soberanía nacional y asegurar el desarrollo autónomo de nuestra patria.

CENTRO DE DOCUMENTACION DE HONDURAS

ESPECIAL

No. 38

HONDURAS

**FEBRERO
1989**

CENTRO DE DOCUMENTACION DE HONDURAS (CEDOH)

Apartado Postal 1882, Tegucigalpa, D.C., Honduras, Centro América

INTRODUCCION

LA AMENAZA A LAS AMERICAS

Las Américas están aún amenazadas. Nosotros advertimos de este peligro en 1980*. El ataque se manifiesta como subversión comunista, terrorismo y tráfico de drogas. La capacidad de las democracias latinoamericanas en su lucha para combatir estos ataques ha sido minada por el estancamiento económico producido en toda la región por la agobiante deuda externa. Las resultantes de violencia política y de mayor pobreza han producido una crisis migratoria creciente, tanto dentro como desde la región misma. A pesar de los esfuerzos iniciales de la administración Reagan para solucionar estos problemas y sus causas fundamentales la situación no es menos, sino más grave, ahora que los Estados Unidos se encaminan hacia la última década del siglo XX. Mucho de la falta de progreso se puede atribuir a que no se ha logrado un acuerdo bipartidista que solucione de una manera coherente y efectiva los problemas que enfrenta América Latina*.

PROBLEMAS EN EL HORIZONTE

La subversión comunista y la red terrorista abarca desde Chiapas en el sur de México hasta Chile, haciendo de toda la costa del Pacífico, a partir del Río Grande, un escenario de conflicto abierto. Es claro que la estrategia comunista para esta región es la de lograr el poder, o por lo menos, involucrar a las fuerzas de seguridad occidentales en operaciones simultáneas prolongadas en varios países. La magnitud de este objetivo tiene la implicación estratégica de reducir las obligaciones adquiridas por los Estados Unidos en la mayor parte de los países de Europa y Asia y así intensificar la capacidad de presión soviética. Esto es así aunque se diera una reducción de las fuerzas nucleares estratégicas soviéticas por el acuerdo sobre control de armas. Al mismo tiempo, la estrategia soviética obliga a Estados Unidos a aumentar su capacidad para abarcar sus responsabilidades globales.

En la década pasada, esta amenaza subversiva-terrorista ha crecido, no ha disminuido. Nicaragua y Cuba, satélite de los soviéticos en el hemisferio, han involucrado en el comercio de drogas y han avanzado hacia relaciones de cooperación y posiblemente de dominio con mafias de la droga en Colombia. Los abundantes recursos que el narcotráfico produce han aumentado la capacidad de la amenaza subversiva más allá de lo inicialmente concebible. La posibilidad de tener que involucrar fuerzas militares americanas para combatir este peligro es hoy objeto de debate público ante comités del Congreso.

Al mismo tiempo, las economías latinoamericanas han venido quedando rezagadas con tasas de crecimiento positivo sólo marginales. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) en su informe preliminar para 1987, hace notar que en términos per cápita el PIB de la región subió solamente 0.5 % en 1987, comparado con el débil 1.4 % de incremento en 1986. El informe concluye que estas cifras significan que "el deterioro del nivel de vida sufrido por la mayoría de las economías relativamente más pobres de América Latina continuó en 1987". Además, ha habido un incremento en la tasa de inflación. A la cabeza están Nicaragua con 1.226 %, Brasil con 330 %, Argentina con 178 % y México con 144 %. Lo más preocupante es la alta tasa de inflación en las tres naciones más grandes de América Latina, que son también las que tienen deudas más elevadas. Cuando se señala que el total de la deuda externa subió más del 4 % respecto a 1986, es obvio que el problema del servicio de la deuda se agravará en la próxima década.

La mayoría de los norteamericanos mira el asunto de los emigrantes latinoamericanos

* "Una Nueva Política Interamericana para los Ochenta". Comité de Santa Fe. L. Francisco Bouche, Roger Fontaine, David Jordan, Gordon Sumner y Lewis Tambs, editor.

* Por ejemplo, el Congreso tardó en apoyar o articular una alternativa a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (retraso de 2 años y medio), a Radio Martí (tres años), a la ayuda para El Salvador (casi tres años) y todavía hoy cuando escribimos no ha construido una política bipartidista sobre Panamá.

americanos como un problema migratorio de Estados Unidos. Cómo aceptar o desalentar a los millones de desplazados que vienen hacia los Estados Unidos es la preocupación prioritaria. La respuesta inicial, y probablemente sólo la primera de muchas, fue la ley Simpson-Rodino. Esta ley espera absorber a los inmigrantes ilegales que puedan probar que comenzaron a vivir en los Estados Unidos antes de 1982 y desanimar más migraciones a través de la imposición de multas a los empleadores que a sabiendas contratan a inmigrantes ilegales desde que se aprobó el proyecto el 6 de noviembre de 1986. Sin embargo, el problema no es meramente la atracción hacia los Estados Unidos de inmigrantes voluntarios, sino el desplazamiento de millones de personas por la violencia marxista, la pobreza, la mala administración gubernamental y el crecimiento general de la anarquía y la corrupción en América Latina. La fuente de este problema está en las presiones que producen la emigración.

Si estas tendencias continúan, es evidente que nos enfrentaremos con:

- más actitudes hostiles en América Latina;
- más Estados pro-soviéticos;
- más subversión;
- grandes amenazas al Sistema Financiero Internacional;
- más crimen y narcotráfico, provocado por la subversión;
- más olas de emigrantes;
- y finalmente, grandes probabilidades de un involucramiento militar de Estados Unidos.

Observamos que persiste aún una actitud de indiferencia estratégica, de la que ya advertimos en el primer informe de este Comité en 1980. No habrá perspectiva de cambio de estas tendencias mientras los Estados Unidos no enfrenten el problema de la región de una forma coherente, seria y bipartidista. Los costos para dirigir cada uno de los síntomas ya son altísimos y el precio que los Estados Unidos pueda verse forzado a pagar excederá todo lo que hemos enfrentado en los 200 años de nuestra historia.

LA NECESIDAD DE DEMOCRACIA

El mayor triunfo de la Administración Reagan en América Latina fue el retorno a la democracia. Pero este logro, aún con apoyo bipartidista, puede ser mucho más frágil de lo que actualmente se conside-

ra. Debemos prestar atención a las vulnerabilidades del régimen democrático.

Nuestro concepto de régimen significa tanto el gobierno temporal como el permanente. En la democracia, el gobierno temporal es el oficialmente elegido. El gobierno permanente son las estructuras institucionales que no cambian con el resultado de las elecciones: la institución militar, la judicial y la civil. Para ser democrática la sociedad debe apoyar un régimen responsable de esa democracia. Esto nos lleva a una mayor comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo.

Existe estatismo cuando la sociedad está perdiendo o ha perdido la capacidad de sostener un régimen responsable. En América Latina el estatismo es un problema persistente y profundo. Tocqueville reconoció la persistencia del estatismo en Francia a pesar de la revolución. El señaló que el "ancien regime" se aferraba al poder aún después de que la revolución había sustituido aparentemente, de forma permanente, el gobierno monárquico por la Asamblea Constituyente: "No nos maravillamos al ver con qué sorprendente facilidad fue restablecida la centralización en Francia a comienzos de este siglo. Los hombres del 89 habían derrocado la estructura, pero sus bases se mantuvieron aún en las mentes de sus destructores, y sobre esas bases fueron capaces de reconstruirla pronto y con más solidez de la que nunca había tenido antes".

La forma de pensar de muchos pueblos latinoamericanos es tal que aunque las formas gubernamentales puedan cambiar el régimen, tanto en el gobierno permanente como en el temporal persiste el estatismo. Los gobiernos pueden ser inestables y cambiar, pero todos tienden a incrementar el papel del Estado durante su período de mandato. El poder expansivo y absorbente del Estado está presente en todos los países donde esta perspectiva domina la cultura política.

Si los gobiernos electos no van acompañados tanto de un cambio de estructuras como de un cambio en la cultura política, los Estados Unidos y América Latina se distanciarán cada vez más. No debe ser, como parece, una sorpresa el que la Unión Soviética haya recibido tan calurosa aceptación entre los gobernantes recién elegidos. Pero sí causan sorpresa las abundantes informaciones de los periódicos de Estados Unidos que señalan el incremento de los contactos soviéticos con los nuevos gobernantes.

tes electos de América Latina. Las nuevas conquistas soviéticas incluyen: el acuerdo firmado por el ministro Edward Shevardnadze para un intercambio cultural y de cooperación económica con Brasil y Uruguay en 1987; la renegociación de la deuda con Perú, donde Moscú encargó 80 barcos comerciales y de pesca de los astilleros de la marina peruana como parte del plan para reducir la deuda; y el primer gran acuerdo pesquero entre Moscú y Argentina en 1986.

No es una ironía el que los esfuerzos soviéticos para establecer vínculos con estas naciones latinoamericanas hayan sido apoyados por la nueva ola de gobiernos electos que ha avanzado en toda la región. Esto no es sólo resultado de los esfuerzos de los nuevos gobernantes por distanciarse de los gobiernos militares que han reemplazado, los cuales en muchos casos ya habían tenido trato con los soviéticos. Tampoco esto ha sucedido simplemente por aplacar a los partidos de izquierda pro-soviéticos. Ni tampoco es una respuesta natural al cambio de táctica soviética hacia los países del Tercer Mundo.

Todos estos factores han incidido, pero lo más importante es que el régimen latino es estatista por tradición aún cuando esté presidido por gobernantes democráticamente elegidos. El régimen dirigista va siendo sustituido crecientemente por la iniciativa del ciudadano, reduciendo así su autonomía sobre la sociedad civil. El régimen soviético es más compatible con el estatismo latino que el de los Estados Unidos. En muchos casos, esto es cierto, aun cuando el régimen latino sea democrático. El incremento de las becas soviéticas para estudiantes latinos es una señal del reconocimiento de Moscú de que la educación soviética y el estudio en las instituciones del Estado soviético son apropiados para penetrar los regímenes estatistas latinos. En 1978, Moscú ofreció 2,900 becas; una década después el total fue triplicado a casi 10,000. La voluntad soviética de intercambiar y construir enormes proyectos en sectores públicos encaja en las mentalidades estatistas de las culturas latina y soviética.

Además, la voluntad de Moscú de comprar computadoras y software brasileños está abriendo una puerta hacia el país más rico de Latinoamérica. Esto coincide también con las ofertas para establecer cooperación

en el negocio del ferro-manganeso, y para promover el programa espacial del Brasil. Estas iniciativas, a su vez presionan a Argentina a cooperar más con los soviéticos, pues Moscú sigue estando preocupado por el desequilibrio comercial que le resulta de la compra masiva de granos argentinos.

Pero el problema de fondo es cultural. Se trata de la lucha sobre qué régimen es mejor. El asunto, por lo tanto, no es solamente sobre las formas y procesos de elección de los dirigentes. El enfatizar el proceso electoral empaña los demás requerimientos esenciales de una democracia. Existe la tendencia en Estados Unidos de enfatizar las elecciones hasta el punto de excluir otras exigencias. Se ve a menudo el estatismo como una forma de beneficio social. Lo que no se comprende es que un régimen estatista en Latinoamérica socava la independencia de la sociedad como comunidad activa y autosuficiente que puede pedir cuentas y las pide a los representantes que eligió. Régimen democrático es aquel en el que es responsabilidad del gobierno preservar la sociedad de un ataque externo o de la intromisión del aparato estatal.

Los Estados Unidos han recuperado su poder. Hemos reconquistado el orgullo y el sentido de los objetivos que construyeron este país y lo convirtieron en la gran potencia que es hoy día. Pero ser poderoso también tiene sus responsabilidades. Los Estados Unidos no pueden darse el lujo de tropezar o equivocarse. La Unión Soviética es un adversario que no enfrenta el mismo tipo de responsabilidad hacia sus ciudadanos que la que enfrenta nuestro gobierno. La estructura de poder en Moscú permite al Buró Político realizar una política exterior efectiva, concertada y a largo plazo. Los políticos norteamericanos tienen que enfrentar el hecho de que los intereses soviéticos son contrarios a los nuestros, no solo en términos geopolíticos, sino porque la ideología y los valores que promueven son fundamentalmente antagónicos con la libertad y la democracia. Los políticos norteamericanos deben ser capaces de reconocer la amenaza que significan los soviéticos y luego contraatacarla. Esto significa que los programas de objetivos específicos tienen que ser coordinados con los intereses y metas nacionales a

largo plazo de los Estados Unidos; y que esos intereses y metas deben mantenerse nitidamente definidos.

Además de enfrentar la amenaza soviética, las naciones latinoamericanas confrontan muchos problemas que son internos y también estructurales. Los Estados Unidos pueden ayudar a estos países para que se ayuden, al garantizar que cualquier esfuerzo para promover la democracia será recompensado. No podemos dejarlos a merced de los traficantes de drogas, los terroristas y de un Estado 'expansivo, como tampoco podemos permitir que se extienda la tiranía imperial soviética. No podemos detenernos a contemplar que la superación de la pobreza sea bloqueada por políticas miopes sobre la deuda o por políticas económicas que destruyen la economía. Los políticos norteamericanos deben enviar el siguiente mensaje claro y firme: El buen vecino ha regresado, y vino para quedarse.

PRIMERA PARTE: ESTRATEGIA PARA UN REGIMEN DEMOCRATICO

FUNDAMENTOS PARA UNA POLITICA DEMOCRATICA

Los norteamericanos tienden a creer que las elecciones democráticas son suficientes para establecer actitudes democráticas en la estructura de un país y para promover un mejoramiento en las relaciones latino-americanas. Sin embargo, es evidente que aunque se han instalado formas democráticas en Latinoamérica, el patrón del estatismo no se ha alterado. De hecho los Estados Unidos están enfrentando dificultades en el manejo de asuntos políticos, económicos y diplomáticos con muchas de estas democracias, a la vez que son testigos del surgimiento, de la presencia e influencia soviéticas.

Los soviéticos establecen claramente una distinción entre estar en el gobierno y estar en el poder. Se dirige así la atención hacia lo que es la esencia de un régimen: si la forma de gobierno es congruente con la estructura gubernamental permanente. Esta distinción explica por qué para los soviéticos los comunistas locales en el gobierno no están en el poder hasta que controlan las fuerzas armadas. Los Estados Unidos tienen que ser igual de realistas y deben buscar una cultura pro-democrática, tanto en el gobierno permanente como en la administración temporal.

El régimen democrático requiere que el mecanismo político permanente, es decir, las estructuras institucionales, mantengan el orden y administren la justicia. Asimismo, que el gobierno temporal -que es la administración electa-, esté al servicio de la sociedad. El objetivo del régimen democrático es preservar la independencia de la sociedad para que ésta sea verdaderamente una comunidad y permanecer responsable ante la misma.

Lo más significativo de este objetivo de la política norteamericana implica que los gobernantes latinos acepten controles sobre su poder político y mantengan la distinción entre régimen y sociedad. La tendencia en los Estados Unidos es fijarse excesivamente en el proceso electoral. No obstante la importancia del mismo, esto limita la comprensión del problema, que es establecer en América Latina regímenes que funcionen constitucional y democráticamente.

Tenemos un dramático ejemplo en Haití. Los funcionarios norteamericanos se empeñaron, después de la huida de Duvalier, en establecer una democracia a través de la celebración de elecciones. Resultado: el fiasco del pasado noviembre, que demostró que tanto el régimen como la sociedad haitiana no estaban preparados para un gobierno democrático. Esta miopía demuestra que los funcionarios norteamericanos no han comprendido el profundo conflicto cultural que existe en Latinoamérica. Aun con elecciones, el régimen puede seguir siendo profundamente estatista y continuar moviéndose inexorablemente hacia el poder absoluto sobre una sociedad cada vez más débil*.

En sentido político, el estatismo incluye estatismo y nacionalismo integral. La tendencia es hacia la centralización del control de la actividad económica y a hacer desaparecer la distinción entre sociedad y régimen. Si los que han sido electos tienen posiciones estatistas, el proceso hacia el estatismo y por lo tanto, hacia un régimen antidemocrático no será revertido celebrando elecciones.

* Notables ejemplos son México y Perú, en donde crisis económicas provocadas por el gobierno se enfrentaron nacionalizando la banca y consecuentemente, agravan do más la situación.

LA OFENSIVA CULTURAL MARXISTA

Antonio Gramsci (1881-1937), innovador teórico marxista, estudió las relaciones entre los valores que tienen los pueblos para la creación de un régimen estatista. Gramsci argumentaba que la cultura o la red de valores en la sociedad mantiene su primacía sobre la economía. De acuerdo con Gramsci, no serían los trabajadores los que conquistarían un régimen democrático sino los intelectuales. Para él, la mayoría de los hombres tienen los valores ordinarios de su sociedad pero no son conscientes del por qué mantienen esos puntos de vista o de cómo los adquirieron. Se desprende de este análisis que es posible controlar o moldear el régimen a través de un proceso democrático si los marxistas consiguen crear los valores dominantes de la sociedad. Los métodos marxistas y los intelectuales podrían lograr esto dominando la cultura de la nación, lo que implica un proceso para lograr una fuerte influencia en la religión, las escuelas, los medios de comunicación y las universidades. Para los teóricos marxistas, el método más prometedor para crear un régimen estatista dentro de un ambiente democrático es la conquista de la cultura de esa nación. Fieles a este patrón, los movimientos marxistas en latinoamérica han sido dirigidos por los intelectuales y los estudiantes, no por los trabajadores.

Es en este contexto en el que se debe entender la teología de la liberación: como una doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado anti-Papal y anti-libre empresa destinada a debilitar la independencia de la sociedad frente al control estatista. Es un regreso al galicanismo del siglo XVII, cuando los soberanos por derecho divino buscaban cómo subordinar a la Iglesia tradicionalmente independiente. De esta forma, vemos la innovación de la doctrina marxista injertada en un antiguo fenómeno cultural y religioso.

El ataque no está dirigido sólo a uno o dos aspectos de la cultura. Actúa en un amplio frente, que busca cómo redefinir toda la cultura en una nueva terminología. Y así como el catolicismo es redefinido por los teólogos de la liberación, así también el arte es transformado, los libros reinterpretados, y los programas de estudio revisados. La penetración marxista en América Latina

es seguida por los distintos teóricos marxistas en escuelas y universidades. El control estatal se incrementa sobre la educación a través de libros de texto y manuales exigidos por la burocracia educativa. Un ejemplo típico se dió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en México en los años 30. Gonzalo Vázquez Vela, entonces ministro de educación de Cárdenas, afirmó que "el materialismo dialéctico es la base filosófica de la educación mexicana".

El predominio de la izquierda en los medios de comunicación en América Latina debe entenderse también en este contexto. Ninguna elección democrática puede cambiar las tendencias hacia el régimen estatista si la "industria de concientización" está en manos de intelectuales estatistas. Los medios de comunicación, las Iglesias y las escuelas continuarán girando hacia el estatismo si los Estados Unidos y los recientes gobiernos democráticos no reconocen esto como una lucha del régimen. La cultura social y todas las estructuras del régimen deben ser modeladas para proteger a una sociedad democrática.

UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL

PROPUESTA No.1.

Los Estados Unidos no pueden preocuparse sólo de los procesos formales democráticos sino que deben establecer programas para apoyar la democracia en las instituciones permanentes incluyendo las instituciones militares y la cultura política.

PROPUESTA No.2.

Los Estados Unidos deben de reconocer la necesidad que tienen los gobiernos que intentan crear regímenes democráticos para contener a los partidos anti-democráticos.

Construir un régimen democrático requerirá ir más allá de la forma de la democracia (las elecciones) y de proveer, cuando sea posible, los medios para consolidar las instituciones democráticas locales: sindicatos, grupos empresariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educativas. La Alemania post-hitleriana nos ofrece un buen ejemplo. Solamente a través del fortalecimiento

de grupos autónomos y auto-gobernados como los grupos empresariales en México, o la prensa independiente del Perú, podrán desarrollar en la sociedad una voluntad democrática para vencer el autoritarismo estatista.

Los políticos norteamericanos no deben dejar de tener en cuenta la preocupación de los dirigentes políticos sobre la puesta en práctica de la democracia en sus respectivos países. Lo que a primera vista podría no parecer una completa democratización, sí podría ser una respuesta adecuada a las necesidades de cada país. Se debería dar a las democracias latinas la oportunidad de desarrollar sus propias instituciones democráticas hasta el punto de lograr alguna cuota de estabilidad. Para conseguir esto en el menor tiempo posible se debe educar, hasta donde sea posible, a las fuerzas enemigas de la democratización. Esta propuesta no sólo es importante porque apoya el derecho de los regímenes democráticos de establecer los límites constitucionales de su conducta política, sino también porque reafirma el compromiso de los Estados Unidos con el autogobierno de América Latina.

Al mantener nuestro compromiso con la autodeterminación latinoamericana debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los regímenes latinoamericanos va habiendo mayor concentración de poder en el ejecutivo que en el legislativo. La inclinación latinoamericana a atajar las leyes a través de decretos del ejecutivo tiene una larga historia, y en países como México y Perú, esto significa que un verdadero control del poder del ejecutivo ha de hacerse desde dentro del partido o a través del electorado. El elemento clave es si el régimen es o no responsable ante el pueblo.

PROPUESTA No.3.

Los Estados Unidos deberían fortalecer su capacidad de cultivar valores democráticos entre las fuerzas armadas de la región. En este entendido, el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET) no debería suprimirse por razones como el incumplimiento del pago de la deuda a la AID.

PROPUESTA No.4.

Los Estados Unidos deberían fortalecer el presupuesto de la Agencia Informativa

USIA y el de la Oficina de Diplomacia Pública.

En la lucha por sostener el movimiento de América Latina hacia regímenes democráticos, los Estados Unidos tienen que mantener y desarrollar programas que cultiven los valores democráticos dentro de las estructuras permanentes del gobierno. En este sentido, el programa del IMET viene a ser de extraordinario valor en el diseño de un régimen democrático porque los militares estadounidenses pueden compartir su comprensión de la democracia con los militares latinoamericanos. Por lo tanto, el impacto de este programa no puede ser visto solamente en términos de sus beneficios militares, sino también en su contribución al esfuerzo de democratización. La relación de este programa con otros programas norteamericanos es contraproducente porque podría entorpecer la iniciativa.

En lugar de incapacitar de esta forma los diferentes programas, los políticos norteamericanos deberían reconocer el potencial dinámico que tiene este tipo de programas para impactar las percepciones sociales e institucionales de los regímenes latinoamericanos. El desarrollo de políticas culturales es importante para el apoyo norteamericano al esfuerzo latinoamericano por mejorar la cultura democrática. El esfuerzo gramsciano por socavar y destruir la tradición democrática al subvertir o corromper las instituciones que forman o mantienen esa tradición, debe ser combatido. Teniendo esto en mente, debe ser de extrema prioridad el fortalecer el presupuesto de la USIA, pues es nuestra agencia para hacer la guerra cultural.

PROPUESTA No.5.

Para promover realmente los derechos humanos, los Estados Unidos deberían ayudar a fortalecer los sistemas judiciales de la región. Se debería también diferenciar a los grupos de derechos humanos que mantienen al régimen democrático de aquellos que apoyan el estatismo.

Los derechos humanos pueden comprenderse con propiedad únicamente como el derecho del hombre a contar con sistemas de justicia estatal responsables. No es responsable ante la sociedad un sistema tecnológicamente atrasado y con personal mal capacitado. Cuando el sistema estatal de justicia, tanto la policía como los tribunales, sean responsables

y estén adecuadamente financiados, esto marcará el progreso de Latinoamérica hacia un régimen democrático. Los Estados Unidos deberían ayudar directamente en este proceso en mayor escala de lo que lo están haciendo actualmente. En lugar de no ver las diferencias entre los grupos de derechos humanos que apoyan al régimen democrático y los de tendencia gramsciana que apoyan el estatismo, los políticos norteamericanos deberían desarrollar su propio entendimiento de la raíz del problema y atacarla, en vez de atender sólo a sus síntomas.

SEGUNDA PARTE: ESTRATEGIA ECONOMICA

La política económica de los Estados Unidos debe estar relacionada con nuestro apoyo al régimen democrático. Este régimen requiere de un sistema económico saludable, independiente de un excesivo control e interferencia gubernamental. El desarrollo de un capital de mercado nacional privado y autónomo es indispensable para mantener independiente a la sociedad. Una de las mayores decepciones de la era reaganiana fue el fracaso en usar la crisis de la deuda para crear mercados de capital saludables, tal como lo recomendó este Comité en 1980. Cuando estalló el problema como crisis en 1982, el principal enfoque fue mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores. Aunque este objetivo ha sido apenas conseguido, se perdió la oportunidad de impulsar las sociedades latinoamericanas hacia el capitalismo democrático, es decir, hacia sistemas de libre empresa y mercados de capital que sostienen a sociedades independientes. Todavía no es muy tarde para lograrlo. La persistente crisis de la deuda debería ser utilizada para empujar el proceso de transición de Latinoamérica de gobiernos democráticos a regímenes democráticos.

AJUSTE DE LA DEUDA

Aunque es un avance el reducir la carga de la deuda a los Estados latinos a través de innovaciones como el Plan Baker, intercambios de capital, el plan mexicano, la reestructuración, etc., la política de la deuda debería también incluir medidas a través de las cuales la administración de la deuda apoyara la creación de mercados nacionales de capital.

Ninguna propuesta específica será probablemente definitiva, pero algo que incluya el revender la deuda en el mercado nacional podría ser una manera de llegar a este objetivo. La exitosa conversión de la deuda interna norteamericana hecha por Alexander Hamilton durante la fundación de este país nos ofrece un buen modelo.

PROPUESTA No. 1.

El Departamento del Tesoro norteamericano debe jugar un papel importante en la formulación de una resolución de la crisis estructural de la deuda que afecta a muchos de nuestros vecinos latinos. Dicha resolución de la crisis debe partir del reconocimiento de que el peso actual de la deuda tiene que ser reducido porque nunca podrá ser pagado en los términos presentes. Son viables un sinnúmero de variables del plan Morgan/Tesoro/México de diciembre de 1987.

Finalmente ha sido reconocido que la crisis de la deuda externa es estructural. En algunos países, la deuda está más allá de la capacidad de pago. Los países de menor desarrollo en el mundo deben por lo menos 450 mil millones de dólares, y si la tasa original de interés fuera aplicada a esa cantidad los países deudores podrían pagar sólo en intereses un billón ochocientos mil millones de dólares en los próximos 20 años sin reducir el capital de su deuda ¡ni en un centavo! Incluso si las tasas se renegociaran por debajo del 12%, los deudores seguirían pagando un billón de dólares en intereses. El solo hecho de mantener estos niveles de pago de intereses tendrá efectos devastadores en sus economías y en la nuestra. Los países deudores experimentarán un crecimiento cero ó negativo, llevándoles esto a una creciente pobreza y no tendrán divisas para comprar productos estadounidenses. Está estimado que el deterioro económico provocado por la deuda externa de América Latina ha causado una pérdida de 70 mil millones de dólares en ventas a productores estadounidenses.

PROPUESTA No. 2.

Los intercambios de capital de la deuda ("debt equity swaps"), que están siendo vehículos eficaces para reducir

por descuento la deuda externa de los endeudados, deberían ser promovidos agresivamente como un medio para incentivar el crecimiento del sector productivo privado.

Los intercambios de capital permiten a los inversionistas extranjeros o nacionales comprar parte de la deuda (\$) a descuento del acreedor y luego intercambiarla al valor de la moneda local. Así, por ejemplo, un inversionista puede comprar un préstamo de \$ 50 millones a un banco norteamericano por 25 millones el banco central del país deudor le devuelve 50 millones de pesos bajo la condición de que la deuda intercambiada sea invertida en una empresa productiva. Sin embargo, se debe tener el cuidado de alentar a los nacionales a participar en este intercambio y en los negocios conjuntos basados en el intercambio para no provocar un nacionalismo negativo en lugares donde ha habido una tradición de hostilidad a la inversión extranjera.

CAPITALISMO DE ESTADO VS. EMPRESA PRIVADA

PROPUESTA No. 3.

Las estrategias de inversión y de política comercial norteamericana deberían ser diseñadas con la idea de ayudar a la formación de mercado de capital nacional en determinados países latinos. Por ejemplo, las ganancias podrían ser en parte utilizadas para fortalecer el mercado interno. Los inversionistas podrían aceptar algunos instrumentos de la deuda en acuerdos conjuntos si los Estados Unidos y otras agencias de ayuda se coordinan también para desarrollar un mercado de capital nacional privado en países latinos innovadores.

PROPUESTA No. 4.

Los Estados Unidos deberían alentar, a través de programas tanto privados como estatales, el desarrollo de la empresa privada en América Latina e intentar acelerar el desmantelamiento de industrias estatales.

Básicamente existen solo dos tipos de sistemas económicos: el capitalismo de Estado y el capitalismo privado. Lo que América Latina necesita son empleos y producción. Solamente el capitalismo democrático puede proporcionar producción masiva a menor costo por unidad para el

consumidor. La privatización de empresas para-estatales no rentables ha probado tener éxito en Costa Rica, donde el gobierno ha abandonado 41 de 42 empresas, que habían perdido más de 50 millones de dólares en una década y que sólo habían proporcionado 2,200 puestos de trabajo. Estas empresas estatales se vendieron, a través del intercambio de capital, a acreedores extranjeros, reduciendo así la deuda externa costarricense, o utilizaron los fondos PL 480 para comprar las acciones estatales*.

El desmantelamiento de empresas estatales y la promoción del sector privado permitió a los costarricenses concentrar esfuerzos en nuevos productos de exportación tales como piña, nueces (macadamias), mangos, cítricos e industria ligera. Cambiar del café, algodón, ganado y bananos, como productos básicos de exportación permitió a Costa Rica incrementar sus exportaciones de productos no tradicionales de \$ 300 millones en 1986 a \$ 500 millones en 1987, un incremento del 66% en un año. Un logro extraordinario para el sector privado.

INICIATIVAS ECONOMICAS Y ECOLOGICAS

PROPUESTA No. 5.

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe necesita ser revitalizada, expandida y prolongada en doce años más hasta el 2007.

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe ha tenido un éxito relativo, aun cuando la inversión privada norteamericana no ha llegado al nivel inicialmente esperado debido en gran parte a la confusión inicial. La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y la Corporación de Inversiones en el Extranjero (OPIC) pueden revitalizar dicha iniciativa a través de un programa de promoción de inversiones que busque identificar las oportunidades para posibles inversionistas, dándole particular énfasis a las posibilidades de negocio conjunto entre los Estados Unidos y los países anfitriones.

* Los PL 480 proveen de moneda nacional a los gobiernos a cambio de la compra de excedentes agrícolas norteamericanos. Bela Balassa y otros. "Hacia un renovado crecimiento económico en América Latina". México, 1986. Capítulo 4.

La gama de productos que se permite entrar a los Estados Unidos sin impuesto debería ser incrementada para incluir un sinnúmero de productos hechos con textiles norteamericanos y otros.

PROPUESTA No.6.

La política comercial agrícola norteamericana con América Latina y los programas de asistencia para dicho sector deberían ser más audaces para maximizar las ventajas comparativas e incentivar giros hacia la producción de cultivos de exportación que incrementen el comercio recíproco.

El mercado de invierno norteamericano de frutas y legumbres es el ejemplo más obvio de cómo la reducción de barreras de importación al mercado norteamericano se ha aprovechado de las ventajas productivas comparativas para una ganancia mutua.

La tierra, el clima y los costos relativos de mano de obra y de tecnología le dan a los Estados Unidos ventajas en los costos de producción en cereales y granos con respecto a México, Centroamérica y el Caribe. De igual forma, la Cuenca del Caribe posee ventajas en la producción de frutas, legumbres y azúcar. Sin embargo, el maíz y el frijol son productos básicos en muchos de estos países. Los pequeños agricultores en Guatemala y Costa Rica pueden obtener mejores ganancias convirtiéndose en productores de productos como melón, espárrago, moras, etc. para venderlos a los Estados Unidos y comprar maíz importado de los Estados Unidos.

Conociendo la realidad económica de las ventajas comparativas, la agricultura chilena se ha puesto al frente en el campo de la diversificación de cultivos especializados para su exportación a Asia, Europa y los Estados Unidos. El cultivo de frutas y legumbres requiere de trabajo intensivo y emplea "al más pobre de los pobres" en áreas rurales menos desarrolladas, lo que también evita que los campesinos engrosen las filas de los desempleados urbanos.

La producción de granos básicos requiere ahora de una mano de obra muy reducida debido al enorme éxito de la "revolución verde", que encabezó la investigación de la Rockefeller Foundation y de los programas de la AID. Esto permite el reemplazo de obreros agrícolas en nuevos y provechosos esfuerzos en la agricultura.

PROPUESTA No.7.

Se debe dar mayor acceso al mercado norteamericano al azúcar centroamericana y del Caribe, aboliendo el actual sistema proteccionista de cuotas. Esto ahorrará dinero a los consumidores de los Estados Unidos y mejorará las economías de nuestros vecinos.

Los consumidores norteamericanos pagan siete veces más el precio mundial del azúcar, ya que la presente ley establece un mercado cerrado y no competitivo fijando artificialmente los precios a niveles muy altos para beneficio apenas de unos 12.000 pequeños productores norteamericanos. Esta situación se ha agravado en los últimos 8 años. Es totalmente incomprensible que al mismo tiempo que nuestro gobierno ha incrementado la ayuda económica a la región haya cerrado a la vez el mercado a uno de los más importantes rubros de exportación regionales.

PROPUESTA No.8

Los Estados Unidos, con la ayuda de la OEA y en cooperación con grupos ecológicos privados, deberían luchar por salvar los bosques tropicales que aún quedan y por devolver el equilibrio ecológico a zonas ya deforestadas.

En la última década se han destruido enormes áreas de bosques tropicales, creando zonas áridas en Centroamérica, el Caribe (especialmente Haití), la cuenca del Amazonas y Panamá. Una vez deforestada la zona, la erosión y la destrucción ambiental la dominan, en lugar de ser aprovechada por empresas agrícolas productivas. Los esfuerzos interamericanos para la reforestación y, cuando es posible, para devolver la zona a su estado original, deberían ser apoyados con programas similares a los iniciados en 1985 por el Banco Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales y agencias de la ONU. La Escuela de Agricultura para los Trópicos proyectada en Costa Rica en 1986 debería ser apoyada. En ella se entrenarían técnicos para la protección de los frágiles bosques tropicales.

PROPUESTA No.9.

Los Estados Unidos deberían reconsiderar el programa de plantas gemelas e industrias fronterizas con México, con la idea de obtener posibles ventajas económicas y sociales a largo plazo en ambas repúblicas.

Las maquiladoras a lo largo de la frontera México-norteamericana han proporcionado empleo a cientos de miles de mexicanos. Sin embargo, no está del todo claro si los obreros norteamericanos se han beneficiado de la misma forma. Más aún, los millones de mexicanos que se han sentido atraídos a emigrar al norte y cuyas aspiraciones no han sido satisfechas tienden a cruzar la frontera estimulando más la inmigración ilegal.

La mayoría de los mexicanos que cruzan la frontera son varones y, por lo general, no se pueden emplear en las maquiladoras, ya que este tipo de trabajo lo realizan mejor las mujeres. Este sobre-empleo de mujeres ha debilitado la estructura familiar mexicana y ha exacerbado las ya deterioradas condiciones sociales, ambientales, sanitarias y educacionales en los pueblos fronterizos. Además, la concentración de nuevas industrias a lo largo de la frontera norte de México ha incrementado el desequilibrio del ya desigual desarrollo mexicano.

Las industrias norteamericanas deberían, por lo tanto, considerar el mover las maquilas más hacia el sur, en territorio mexicano. Este cambio en la frontera mejoraría el equilibrio del desarrollo de México, promovería las industrias locales, estabilizaría la familia mexicana y ayudaría a resolver algunas de las situaciones sanitarias y sociales provocadas por el Programa de Industrias Fronterizas. A largo plazo, este cambio beneficiaría a ambos países.

TERCERA PARTE: ESTRATEGIA DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES PERMANENTES DE LOS PAISES LATINOS Y FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION REGIONAL.

Los pilares claves de las estructuras gubernamentales permanentes de los regímenes latinos son las fuerzas armadas y el poder judicial. La política pro-democrática de un régimen debe reconocer que tanto los militares como las instituciones judiciales llevan el peso de la responsabilidad en la conducción de los conflictos de baja intensidad y del narcotráfico, a la vez que se van acostumbrando a los requerimientos democráticos que cada administración temporal tiene para ser responsable ante la sociedad. Las iniciativas bilaterales norteamericanas para fortalecer dichas instituciones, deberían ser apoyadas multilateralmente a través de la OEA.

EL PROBLEMA DE LOS CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD

PROPUESTA No.1.

El Congreso norteamericano ha reconocido la creciente amenaza que los conflictos de baja intensidad representan contra los débiles regímenes democráticos y ha decretado el apoyo norteamericano a las fuerzas armadas de la región que enfrentan este desafío. El poder Ejecutivo debería de tomar medidas rigurosas para llevar a cabo esta disposición legislativa.

La mayoría de los regímenes latinos se enfrentan a lo que ha sido identificado en Washington como conflictos de baja intensidad. Este término, cada vez más empleado, se utiliza para describir una forma de lucha que incluye operaciones psicológicas, desinformación, terrorismo y subversión cultural y religiosa. El Congreso ha dispuesto una respuesta razonable a este problema ampliamente reconocido. El Ejecutivo, sin embargo, ha sido extremadamente vacilante al poner en práctica dicha legislación.

En 1986, el Congreso aprobó y el Presidente firmó la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de Defensa. Esta ley se aprobó porque el Departamento de Defensa no estaba apoyando adecuadamente las operaciones especiales ni enfrentando decididamente las consecuencias de los conflictos de baja intensidad. Además, se le añadió una enmienda en la cual se encargaba a los Estados Unidos de formar un Comando de Operaciones Especiales. Esta ley requería a un nuevo Sub-Secretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad. Se creó también un nuevo Comando Unificado con amplias responsabilidades en entrenamiento y promoción, único entre los ya existentes Comandos Unificados. Al Comando se le otorgó por ley su propio programa en el presupuesto de defensa, MDF-11. El Congreso quería que la planificación de los conflictos de baja intensidad estuviera a la par de la planificación global estratégica. El Congreso ha mantenido su apoyo a la ley a pesar de las fuertes críticas hacia ella. La nueva ley debería proporcionar mejores mecanismos para encarar otros asuntos críticos y de la misma índole, como el terrorismo, el tráfico de drogas y las operaciones psicológicas y de inteligencia del enemigo. Los creadores de la ley reconocen que los Estados Unidos son vulnera

bles a otras formas de lucha además del conflicto armado a gran escala.

PROPUESTA No. 2.

Los Estados Unidos deben prepararse para extender sus programas de ayuda a los militares latinoamericanos como parte de su reconocimiento de que las insurrecciones locales son azuzadas desde el exterior. La complejidad de este reto requiere de una respuesta comprensiva de nuestra sociedad.

PROPUESTA No. 3.

Si se mantienen las tendencias actuales, los Estados Unidos continuarán enfrentando la exportación de la revolución nicaragüense en la década de los 90. Una política de contención no será barata y no funcionará a largo plazo. Los Estados Unidos tendrán que apoyar la democratización de Nicaragua o si no, pagar exorbitantes costos para combatir la subversión en los países vecinos de Nicaragua.

PROPUESTA No. 4.

Una política de democratización de Nicaragua requerirá de un desarrollo sofisticado de la doctrina del conflicto de baja intensidad. El aspecto más importante de este desarrollo estará en la educación de los medios de comunicación y del público norteamericano para que comprendan la tendencia de los regímenes comunistas nacionales de Latinoamérica a subvertir a sus vecinos con el apoyo velado de la Unión Soviética.

PROPUESTA No. 5.

Las instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos deben de empeñarse en educar a los líderes comunitarios y de los medios de comunicación sobre la naturaleza de la estrategia marxista-leninista adaptada por los nacionalistas a temas del subdesarrollo. El matrimonio del comunismo con el nacionalismo en América Latina proporciona el mayor peligro enfrentado hasta ahora por la región y por los intereses norteamericanos.

PROPUESTA No. 6.

Los latinoamericanos pueden revertir

la tendencia comunista en sus países, lograr la democracia en la región y satisfacer sus aspiraciones de autodeterminación con el apoyo bipartidista entre el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos.

El bloque soviético proyecta exitosamente su poder ante cada país del hemisferio y todo indica que esta tendencia continuará. Es lamentable pero cierto que las mayores potencias económicas del mundo libre no se han comprometido plenamente a apoyar la libertad y la democracia en el hemisferio occidental. Los Estados Unidos deben ir a la cabeza dando más recursos a las amenazadas sociedades latinas. Es imperativo que los militares latinoamericanos se den cuenta de que los gobiernos elegidos pueden hacer frente al reto de la subversión y el terrorismo.

LA CRISIS DE LAS DROGAS

PROPUESTA No. 7.

Para ayudar a las sociedades latinas a combatir el tráfico de drogas y el terrorismo los Estados Unidos deberían apoyar con asistencia técnica y financiera el desarrollo de un sistema judicial independiente. Los Estados Unidos deberían también dar ejemplo reduciendo la demanda interna de drogas.

Al apoyar un poder judicial independiente los Estados Unidos pueden ayudar a América Latina a enfrentar con éxito los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo. Si las autoridades judiciales tienen los medios para reaccionar con efectividad y entereza ante estos delitos podrían entonces prevenir una amenaza creciente, que pone en peligro la legitimidad de las democracias en lucha.

Además, los Estados Unidos deben dar el ejemplo con su propio aparato judicial reduciendo la demanda en nuestro país. Dentro de los Estados Unidos la ejecución de la ley debería reducir las ganancias de los vendedores e incrementar sustancialmente los riesgos de los compradores. De esta forma, los Estados Unidos pueden proporcionar un modelo tanto de reducción de la demanda como de firmeza judicial. La posesión de narcóticos debe ser motivo de sentencia carcelaria y su venta debe ser causa de graves penas sin dar lugar a la libertad condicional. Después de establecer un ambiente de aplicación

firme de la ley, se podría iniciar y probar un programa de legalización limitada, que esté unido a la rehabilitación y educación.

RENOVACION DE LA OEA

PROPUESTA No. 8.

Los Estados Unidos deberían dar más énfasis al trabajo con los miembros de la OEA con respecto a los problemas mutuos de seguridad militar (conflictos de baja intensidad), tráfico de drogas, inmigración y deuda.

Los Estados Unidos demostraría sensibilidad hacia los problemas que contribuyen a la emigración latinoamericana y a la inmigración hacia los Estados Unidos trabajando con la OEA propuestas sobre la deuda en conjunto con el BID, el Banco Mundial, el FMI y el Tesoro.

Hablar sobre la OEA provoca a menudo aburrimiento en el aparato de política exterior de este país. No debería de ser así. La falta de interés de facto de la administración Reagan en esta organización ha sido un grave error. La promesa de cumplir plenamente el compromiso financiero con la OEA y el rechazo posterior a hacerlo, dañó seriamente la credibilidad norteamericana.

La OEA, en contraste con la ONU, ha probado ser un cuerpo mucho más amistoso. Aunque los Estados Unidos han sufrido golpes en la OEA, especialmente con la crisis de las Falkland/Malvinas, que continúa encendiendo los ánimos en todo el hemisferio, existe menos antagonismo y más cooperación en la OEA que en la ONU.

PROPUESTA No. 9.

El embajador norteamericano ante la OEA debería estar a cargo de la coordinación con los representantes de la región en Washington, de iniciativas multilaterales con respecto a las áreas mencionadas arriba. Como primer paso, los Estados Unidos deben pagar su contribución a la OEA para demostrar que sí toman en serio sus responsabilidades.

PROPUESTA No. 10.

El involucramiento de la OEA en asuntos de seguridad y tráfico de drogas proporciona a los Estados Unidos el mejor camino para librar una guerra exitosa en contra de

los imperios criminales que amenazan a todo el hemisferio.

La próxima administración necesita definir sus prioridades. Nuestra agenda y la de América Latina no son necesariamente incompatibles. Si la OEA está adecuadamente financiada y encaminada en buena dirección, ésta puede servir a los intereses mutuos.

Es de especial interés un mayor estímulo al papel de la OEA para promover mayor cooperación entre sus miembros en la lucha contra el narcotráfico. La conferencia de Río y el creciente reconocimiento de que la región enfrenta el problema del tráfico de drogas, indica la voluntad de sus miembros en particular en operaciones internacionales conjuntas.

Son mucho más preferibles las operaciones de paz de la OEA en Centroamérica que los esfuerzos de los No Alineados o los esfuerzos hostiles que pueda montar la ONU en esta área tan sensible. Con el involucramiento de la OEA, sus miembros estarán más al tanto de la amenaza externa que enfrenta la región y la cooperación multinacional contribuirá a la legitimación y a una percepción internacional de los esfuerzos de paz. Pero los esfuerzos de la OEA requieren de dinero, algo que hoy necesita desesperadamente la organización.

Claramente, la próxima administración tendrá que tomar decisiones básicas sobre qué es lo que quiere conseguir con su apoyo a los organismos internacionales. Esa decisión decidirá el futuro de la OEA. Los Estados Unidos necesitan fomentar la cooperación en todos los asuntos que afectan al hemisferio. En cuanto sea posible, los Estados Unidos necesitan recalcar su compromiso con la cooperación, la autodeterminación, las responsabilidades mutuas para combatir el narcotráfico, la asistencia para resolver el problema de la deuda y el de las presiones sobre la población latinoamericana, que huye de la pobreza, el crimen, el terrorismo y la guerra. La OEA es un foro donde los Estados Unidos pueden hacer ver sus puntos de vista a toda la región y de forma constante.

CUARTA PARTE: FUTURAS CRISIS EN AMERICA LATINA Y RESPONSABILIDADES NORTEAMERICANAS.

Los Estados Unidos deben prepararse y prestar especial atención a cinco países que con sus crisis internas constituyen un ejemplo significativo en Latinoamérica: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá.

La nueva política para Latinoamérica en la década de los 90 debe prestar especial

atención a la amenaza general que enfrentan las frágiles democracias latinoamericanas y obstaculizan la difícil transición de regímenes autoritarios o totalitarios. Los cinco países que mencionamos proporcionan ejemplos de problemas que son compartidos hasta cierto grado por la mayoría de los otros países latinoamericanos. Uno de ellos, México, constituye un régimen autoritario que enfrenta una crisis y no parece ser capaz de incorporar al régimen a partidos legítimos de oposición. Dos de ellos, Colombia y Brasil, son democracias, y los dos restantes, Cuba y Panamá, son regímenes totalitarios y autoritarios en decadencia. Los Estados Unidos necesitan prestar mucha atención a estos países como un ejemplo de los problemas más generales de la región.

MEXICO

PROPUESTA No. 1.

Los Estados Unidos necesitan encontrar formas y medios para estimular a México a fin de que acepte una oposición legítima. Las señales de oposición al dominio de un partido único son crecientes. Las reformas internas del PRI no serán suficientes para detener el crecimiento de partidos de oposición.

PROPUESTA No. 2.

Los Estados Unidos deben apoyar cualquier esfuerzo por vender empresas estatales y desarrollar un mercado interno para ayudar a sufragar la deuda externa del país.

PROPUESTA No. 3.

Cualquier apoyo que los Estados Unidos puedan ofrecer para mejorar el corrupto sistema judicial de México sería de gran importancia. Si no hubiera mejora en este sentido, la guerra contra el narcotráfico continuará siendo una comedia.

México ha comenzado finalmente a experimentar reformas en el proceso de selección de candidatos del PRI. En parte, ante la caída del peso mexicano en 1982, el PRI realizó esfuerzos para adaptarse a la opinión pública. Se han permitido elecciones primarias para ciertos candidatos del PRI. Sin embargo, Cuauhtemoc Cárdenas, descendiente del líder revolucionario Lázaro Cárdenas, llegó a la conclusión

de que la reforma interna era una ilusión se separó del partido y formó su propia coalición de partidos de izquierda, llamado "Frente Democrático". Este nuevo frente de izquierda se une ahora al largamente probado frente de derecha mexicano, PAN.

Tanto el PAN como el Frente Democrático presentaron candidaturas muy fuertes y el PRI, a pesar de su gran aparato político y de su habitual fraude electoral, solamente pudo obtener el 50% de los votos. Tanto Cárdenas como Manuel Clouthier, candidato del PAN, continúan en la lucha por la legitimación de las elecciones, lo cual obligaría al PRI a abrir aún más el proceso político y a realizar reformas reales.

El continuo estatismo del PRI ha producido un desempleo masivo o subempleo, lo que a su vez ha provocado más emigración. Este problema estructural del desempleo que se calcula en el 40% de la fuerza de trabajo, necesita ser enfrentado con la venta de las enormes empresas estatales. Probablemente el 85% de la economía mexicana es estatal y lo que resta del sector privado depende de la benevolencia gubernamental. Hay señales de que los funcionarios mexicanos reconocen el problema. Necesitan ser estimulados.

COLOMBIA

PROPUESTA No. 4.

Los Estados Unidos deben ir más allá de fortalecer el actual sistema judicial colombiano y apoyar tribunales especiales bajo el control conjunto del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para hacer frente a la amenaza de la subversión y el narcotráfico, que representan una guerra abierta contra el régimen democrático.

PROPUESTA No. 5.

Estos tribunales deben tener el poder necesario para juzgar, sentenciar o enviar a centros especiales de detención, controlados por el ejército, a los subversivos y a los traficantes de drogas, que operan en contra de la soberanía del pueblo colombiano. El problema de El Salvador se podría repetir en Colombia a gran escala si no se toman pronto medidas firmes. Un apoyo norteamericano a tiempo y un financiamiento adecuado podría prevenir más revueltas y guerras civiles.

Colombia enfrenta una doble amenaza a su seguridad y a sus instituciones democráticas fundamentales. Una de ellas es la insurgencia comunista, la cual creció en tamaño y alcance en la década del 80. Si esta tendencia continúa, Colombia se convertirá en otro El Salvador a mediados de la década del '90, si no antes. Pero la diferencia de la pequeña nación centroamericana, Colombia enfrenta también otro enemigo: los poderosos carteles del narcotráfico acuartelados en las ciudades colombianas de Cali y Medellín.

Los narcotraficantes ya han destruido eficazmente el sistema legal colombiano a través del soborno y la intimidación al poder judicial y a la policía. Estos grandes señores del narcotráfico pueden fácilmente mantener su posición privilegiada a través de recursos tan grandes como el producto de ventas que alcanzan los 9 mil millones de dólares por año. Estas ventas ilícitas de narcóticos se realizan mayoritariamente dentro del país. Para agravar más esta situación la guerrilla colombiana y los carteles de la cocaína trabajan juntos para hacer avanzar sus, a veces, contradictorios objetivos.

En contraste, el gobierno colombiano ha montado, a lo más, una débil campaña en contra de estas dos amenazas. Las fuerzas de seguridad son muy reducidas y no están muy bien equipadas. El gobierno anterior del presidente Belisario Betancur redujo el presupuesto de defensa por la mitad en los difíciles años del comienzo de la década del 80. La administración del Presidente Virgilio Barco ha sido más realista, pero sólo ha restaurado parcialmente la cantidad, y a pesar de que se han tomado algunas medidas en contra del terrorismo y el tráfico de drogas, todavía no se anuncia un plan estratégico nacional. Mientras tanto, los esfuerzos del gobierno para conseguir la paz a través del diálogo y la negociación están en ruinas.

El papel norteamericano no ha sido de mucha ayuda. Aunque la administración Reagan ha presionado fuertemente por la extradición de conocidos traficantes de drogas, redujo recientemente el programa de asistencia de seguridad para Colombia. Esta decisión fue un grave error porque ha socavado la capacidad de Colombia de tomar medidas drásticas en contra de sus dos amenazas.

Por lo tanto, si la actual tendencia continúa y no se detiene, Colombia sufrirá

una gran crisis en la década del 90, lo que afecta directamente a los Estados Unidos, especialmente por el incremento del flujo de narcóticos que llegaría hasta nuestras costas como resultado de los disturbios. La Colombia de los años 90 podría perfectamente empequeñecer lo que ha sido el principal problema de política exterior de este país en los años 80: Centroamérica.

Colombia y, en Centroamérica El Salvador, son ejemplos claves de la necesidad de una reforma judicial. La reestructuración del papel de la ley es un elemento necesario para obtener la estabilidad en estos dos países afectados por la guerra. El colapso del poder judicial en Colombia y El Salvador se convierte en una burla para el padre de la nación colombiana, Francisco de Paula Santander, quien dijo: "Las armas nos dieron la independencia, pero la ley nos dará la libertad".

En El Salvador, los terroristas comunistas y los delincuentes derechistas han destruido por el asesinato y la intimidación la capacidad de los tribunales para juzgar y condenar a los que quebrantan la ley. En la década del 80 las guerrillas comunistas y los narcotraficantes lograron conseguir algo similar, pero a mayor escala, en Colombia. En ambos países es ahora casi imposible condenar a cualquier terrorista o traficante de drogas. Los pistoleros derechistas han quedado al margen de los jueces, quienes viven atemorizados cuando no han sido comprados por los criminales o los rebeldes.

Ya es muy tarde para Colombia y para El Salvador. Muchos creen que la guerra contra los narcotraficantes ya está perdida en Colombia. Sin embargo, los Estados Unidos no pueden permitir que esto quede así para siempre. La próxima administración necesita reconsiderar radicalmente sus programas de asistencia legal. Se gastará más dinero en tribunales especiales y en la protección de los mismos. Esto es un elemento clave si estas instituciones tienen que llevar a cabo su misión. Si no la cumplen, el quebrantamiento de la ley y el orden se esparcirá por todo el hemisferio, incluyendo a los Estados Unidos.

B R A S I L

PROPUESTA No. 6.

Los Estados Unidos deben ayudar a Brasil a resolver la crisis de la deuda

antes de que ésta socave la frágil democracia. Aún si un gobierno elegido colapsara en los 90, se debe ayudar al Brasil para encaminarlo al crecimiento económico y orientarlo hacia el régimen político que necesita.

En la década del 90 Brasil encontrará problemas de igual tamaño que su extensión y su potencial. El gigante suramericano realiza una difícil transición hacia la democracia después de más de dos décadas de gobierno militar. En forma típicamente brasileña, el ejército gobernó el país con mano relativamente suave y se mantuvo alejado de la corrupción. Pero en la mitad de los 80, los brasileños estaban preparados y aún ansiosos por tener un gobierno completamente democrático y civil.

La transición no ha sido fácil. El actual presidente José Sarney apenas evitó un golpe de estado el pasado marzo debido a las acciones de un congreso nacional cada vez más imprudente e irresponsable que hacía las veces de asamblea constituyente. Hasta que los militares le enviaron al Congreso una advertencia final, los legisladores estaban considerando seriamente una nueva Constitución con una forma parlamentaria de gobierno -similar a la experimentada a principios de los años 60 y que fracasó totalmente- y habían decidido celebrar elecciones presidenciales directas. Dicha decisión habría asegurado virtualmente una victoria izquierdista en 1989.

Los problemas políticos del Brasil se han empeorado debido a sus actuales fracasos económicos. La débil administración de Sarney ha exacerbado problemas ya graves. Brasil tiene la deuda externa más grande de cualquier país en desarrollo y en años recientes ha sido incapaz de poder pagar la deuda y los intereses a tiempo. La inflación continúa en cifras que llegan al tercer dígito. La intervención masiva del Estado en la economía y los enormes déficits presupuestarios aplastan la que debería ser una de las más vigorosas economías mundiales. Aún en la era de los militares, cuando se seguían políticas más prudentes, la preferencia era por un crecimiento a cualquier costo, a la vez que se posponía las reformas básicas de la economía.

Si un gobierno izquierdista tomara el poder en la década del 90, los problemas económicos del Brasil en la próxima década se incrementarían en proporción geométrica. Antes de que esto ocurra, es posible que la frágil democracia brasileña sea destruida por otro gobierno militar. El ejército

no encararía bien los problemas económicos y los dejaría sin resolver. Pero si se le presiona, el ejército podría realizar un papel histórico como poder moderador. Este nuevo ciclo de inestabilidad y desconcierto podría, sin embargo alejar al Brasil de su meta de convertirse en país desarrollado, más aún, de ser una gran potencia al final de este siglo.

La administración Reagan ha mirado con más simpatía las ambiciones del Brasil que la administración anterior. Con mucho tacto ha incentivado el proceso democrático, a la vez que no ha criticado firmemente los problemas de derechos humanos ni tampoco el programa de energía nuclear, en contraste con lo que hizo la administración Carter.

Sin embargo, después de un buen comienzo, las relaciones brasileño-norteamericanas han caído de nuevo en picado. Brasil, es más, toda Suramérica, han venido a ser asuntos secundarios a causa de nuestros problemas en Centroamérica. Se han desarrollado fricciones en el comercio y en asuntos de inversiones, especialmente en el área altamente sensible de los productos de alta tecnología, en especial computadora y software. Estos problemas no son de ningún modo responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos, pero si se tienen que resolver deben tener una mayor prioridad de la que han tenido en el pasado. La clave de la diplomacia norteamericana es conducir su política de forma que estimule al Brasil ha reestructurar su economía para que pueda favorecer fuerzas de mercado, tanto a lo interno como al exterior.

El mejor medio para esto ya existe. Fue creado por Henry Kissinger en 1976 y estipula tener dos reuniones anuales entre el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro del Exterior Brasileño. Sin embargo, estas reuniones en sí mismas no pueden resolver los problemas. Debe evidenciarse la voluntad política de ambas partes. La próxima administración debería realizar ese esfuerzo si se quieren evitar disputas económicas más grandes y amargas en la próxima década.

C U B A

PROPUESTA No. 7.

Los Estados Unidos deberían tener rondas de conversación de alto nivel con la Unión Soviética con el objetivo de concertar el retiro militar soviético de Cuba.

PROPUESTA No. 8.

Cuando estas conversaciones lleguen a una conclusión, o al menos a una fase prometedora, los Estados Unidos debería establecer conversaciones con Castro o su sucesor para preparar una Cuba post-Castro.

PROPUESTA No. 9.

Ya que el modelo castrista está terminado, en bancarrota y fracasado como modelo de desarrollo y liberación, los Estados Unidos deberían aumentar sus transmisiones radiales a Cuba como medio de educación cívica para la creación de un régimen democrático. Una Televisión Martí, con programas diseñados para enseñar los elementos de la cultura democrática, debería comenzar lo más pronto posible.

Cuba continúa muy segura en la órbita de la Unión Soviética y bajo el férreo control del envejecido caudillo Fidel Castro. Sin embargo, al final de este siglo, Castro estará llegando a sus 75 años. La próxima administración deberá prepararse entonces para la llegada de la crisis "porfirista" en Cuba, que bien podría suceder durante su período. En el caso del anciano caudillo mexicano, Porfirio Díaz, el régimen se vino abajo rápidamente durante la primera parte de este siglo cuando él perdió el control de sí mismo físicamente, y luego el de su país.

Aunque la administración Reagan nunca fue a "la fuente", según la frase de la declaración de Alexander Haig, ex-Secretario de Estado, no tuvo ninguna ilusión sobre la naturaleza del régimen de Castro y de su objetivo central: destruir los intereses de los Estados Unidos cuando fuera y donde fuera.

Debido en gran parte a la presión norteamericana, el éxito de Castro declinó precipitadamente en la década de los ochenta. Nunca llegó la aparente y fácil victoria en El Salvador. Grenada se perdió. Los jamaquinos eligieron y luego reeligieron un gobierno ardientemente anticastrista. En Angola, las fuerzas cubanas han tenido que enfrentar, en la UNITA de Jonas Savimbi, una fuerza guerrillera mejor armada y cada vez más agresiva.

En el frente interno, la intención de Castro de crear una revolución permanente de tipo estalinista, fracasa notablemente. La economía continúa vacilando

mientras se queda más y más rezagada. A diferencia de las economías del Este, el líder cubano evita cualquier indicio de reforma real. En Cuba está estrictamente racionado el hablar sobre la "perestroika" y mucho menos sobre el "glasnost".

Pero la oposición interna está creciendo dentro de Cuba, oposición que es alimentada por Radio Martí, que ha roto exitosamente el monopolio de Castro sobre la información y la propaganda. En el ejército, por las bajas sufridas en Angola y según algunos desertores, hay mucha inquietud. Los activistas de los derechos humanos, antes completamente desconocidos, han logrado, por primera vez, llamar la atención del mundo sobre el deplorable record del régimen en este aspecto.

En breve, el régimen se encontrará cada vez más a la defensiva y el costo de su aventurerismo en el exterior continúa creciendo sin que se vea ningún tipo de ganancia para el pueblo cubano. El futuro bajo Castro, según sus propias palabras, es igualmente sombrío, a pesar de su incrementada dependencia de nuevos trucos como las minibrigadas y la renovada guerra polémica contra la burocracia.

El fracaso total de Castro, poco conocido fuera de Cuba, es el hecho fundamental y prominente al que debe enfrentarse la nueva administración en su nueva política hacia esta isla clave.

Con la muy real posibilidad de la muerte de Castro en la década de los noventa, los políticos norteamericanos deben percatarse de que se desarrollará una crisis en el régimen. Es muy poco probable que el sistema actual pueda sobrevivir sin su caudillo y sin una masiva intervención soviética para imponer al títere que más les convenga, al estilo de Afganistán. Pero Cuba no es Afganistán. Cuba se encuentra en nuestra órbita de interés, no en la de Moscú. Esto debe estar completamente claro desde el comienzo de la nueva administración.

Al mismo tiempo, la próxima administración puede ayudar a preparar el terreno para un cambio rápido y positivo, una vez que muera el máximo líder. Los Estados Unidos deben estar preparados para conversar con la gente clave en el poder, especialmente los militares cubanos, los que realmente han pagado un precio muy elevado por las ambiciones globales de Castro.

Por lo tanto, en anticipación a la inevitable crisis del régimen cubano que se acerca, la nueva administración debería

redefinir todo su enfoque de la alianza soviético-cubana.

La nueva administración debería tomar la iniciativa con respecto al futuro del régimen cubano. Es vital que comiencen conversaciones de amplio alcance mientras Castro todavía mantenga el control. Los Estados Unidos deberían hacer ver su deseo de normalizar rápidamente las relaciones con una Cuba des-sovietizada. Dicha normalización incluiría levantar el bloqueo. Estas conversaciones deberían ser incondicionales, directas, y de alto nivel, sin intermediarios cuestionables.

El objetivo es hacer que Cuba vuelva a ser un miembro libre e independiente de la comunidad internacional y del hemisferio occidental en particular, de forma que los treinta años de guerra entre cubanos y norteamericanos lleguen por fin a su término.

P A N A M A

PROPUESTA No. 10.

El derrocamiento de Noriega y la celebración de elecciones no serán suficientes para crear un régimen democrático en Panamá. Los Estados Unidos tendrán que tener en cuenta una amplia gama de elementos para un régimen democrático. La reforma de las Fuerzas de Defensa, el apoyo a un poder judicial independiente y la restauración de la economía será lo más esencial.

El régimen panameño está en crisis. Durante veinte años la natural y a veces anárquica exuberancia democrática después fue sofocada por una dictadura militar seudopopulista.

La administración Carter centró todos sus esfuerzos en tratar de forjar una alianza con un régimen corrupto, que se creía estable, al firmar los dos tratados del Canal de Panamá que garantiza el control panameño de esa vía acuática vital para fines de siglo.

Es ahora evidente para todos que Carter se equivocó. Sin embargo, la administración Reagan sólo a sido capaz de hacer una política panameña a punta de tanteos e improvisaciones, centrada casi exclusivamente en deshacer al país de un individuo, su hombre fuerte, el General Manuel Antonio Noriega.

Pero el derrocamiento del dictador no resuelve los problemas panameños ni prepara el camino para una sólida relación panameño-norteamericana.

En la década de los noventa, la nueva administración tendrá que resolver serios problemas que no han sido enfrentados todavía. Las leyes bancarias tienen que ser revisadas para prevenir que el país se hunda una vez más en la corrupción del narcotráfico. La constitución panameña debe ser reformada para permitir la extradición de ciudadanos panameños culpables de delitos en terceros países, aunque esto debería ser preferiblemente tarea de un poder judicial panameño libre de corrupción.

Más allá de esto, los Estados Unidos y Panamá, una vez que se haya instaurado un régimen democrático, deben comenzar a planear seriamente una apropiada administración del Canal, que pronto requerirá de una reparación general y costosa. Al mismo tiempo, se debe comenzar a discutir sobre una defensa realista del Canal después del año 2000. Estas conversaciones deberán incluir la permanencia de los Estados Unidos en algunas instalaciones en Panamá (principalmente el aeropuerto Howard y la base naval Rodman), para una adecuada proyección de fuerza en el hemisferio occidental.

Estos interrogantes no han sido enfrentados y tendrán que serlo en los inicios de la década de los 90 si los intereses nacionales de Panamá como los de los Estados Unidos tienen que estar asegurados en el próximo siglo.

DECLARACION FINAL

Los Estados Unidos y el sistema interamericano enfrentan tremendos problemas en América Latina. La crisis en Centroamérica sigue sin resolver y las corrientes turbulentas en Suramérica son ignoradas poniéndonos en peligro. La deuda, el terrorismo, las drogas, los estados corruptos, las grandes migraciones, la insurgencia comunista y la corrupción, son solamente parte del escenario. Santa Fe II es una estrategia para enfrentar estos problemas y promover la democracia, la libertad y la oportunidad económica en toda la región de una forma activa en lugar de reactiva.

Cuando la administración Reagan asumió el poder, América Latina y la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica tenían un aspecto similar: ambas estaban en quiebra. Santa Fe II, publicado en 1980, se diseñó para enfrentar algunos de los problemas más inmediatos

que tenían los Estados Unidos. Ayudó a orientar las percepciones norteamericanas sobre cómo se debe ver a la América Latina en un contexto geo-estratégico, advirtió sobre la crisis de la deuda externa, motivó el impulso por la democracia e hizo surgir programas como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y Radio Martí.

Pero no todas las propuestas de Santa Fe I fueron retomadas adecuadamente ni se pudieron resolver todos los problemas en solamente ocho años. Esta es la razón de Santa Fe II, que además de seguir la línea innovadora del anterior documento, es también producto de la necesidad. Igual que hace ocho años, el sistema interamericano, especialmente la OEA, continúa siendo subutilizado y ha experimentado un mayor deterioro en los años recientes. Los autores de Santa Fe II han buscado cómo ofrecer estrategias para regímenes que vayan más allá de la sola creación de un sistema electoral. Si son retomadas por la siguiente administración, podría traer estabilidad a la situación política, volátil y tambaleante. Específicamente esto significará la consolidación de organizaciones independientes dentro de la sociedad latinoamericana, la educación del pueblo y la lucha contra los marxistas y otras fuerzas estatistas, culturales y políticas.

El documento de Santa Fe II enfoca con especial atención la economía, argumentando que la democracia requiere de un grado de racionalidad política en la esfera económica. Los sistemas socialistas, dirigidos centralistamente, no producen ni riqueza ni igualdad. No es suficiente crear planes para que las naciones deudoras paguen el interés de sus deudas. Se tienen que diseñar estrategias que les permitan escapar del ciclo de la deuda y generar ahorros reales y crecimiento. Se condena el estatismo, el gigantesco aparato burocrático y la nacionalización, a la vez que se estimula la formación de mercados de capital nacional, liberalización de las leyes económicas, la privatización y desmantelamiento de las empresas estatales existentes. Además de estar a favor de las ventajas de la libre empresa, al contrario del capitalismo de Estado, los autores también proponen medidas que van desde la prolongación de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe hasta la preservación de los bosques tropicales.

Los problemas del terrorismo, insurgencias, drogas y la migración e inmigración

se identifican como factores desestabilizadores, que contribuyen a la volatilidad y falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos, y en menor o mayor grado nos afectan también a nosotros.

La red terrorista se extiende desde Chiapas, México, hasta el sur de los Andes en Chile. El año pasado, los norteamericanos gastaron más dinero en drogas ilegales procedentes de América Latina que en comida. Estos son problemas que obviamente no desaparecerán. Para poder comenzar a enfrentarlos, los políticos norteamericanos tienen que reconocer la crisis que atravesamos y estar preparados para dar pasos extraordinarios. Los primeros pasos, sin embargo, deberían darse para construir la capacidad normal y legítima de los sistemas judiciales nacionales que tienen que soportar directamente el peso de esa crisis.

La última sección da un vistazo a los problemas y oportunidades que se presentan en algunos países latinos especialmente importantes: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá. Se examinan cuidadosamente cada uno de estos países en los asuntos específicos que los políticos norteamericanos tendrán que enfrentar para formular respuestas a sus turbulentas políticas.

La crisis en América Latina no ha sido resuelta. Los problemas han cambiado, pero son tanto o más graves que en 1980. Hemos sido testigos del fracaso en la comunicación y de la persistente confusión y este fracaso debe terminar. Los políticos norteamericanos deben informar al pueblo de lo que está sucediendo, los que toman decisiones necesitan estar claros y especificar los problemas que enfrentan los Estados Unidos y lo que intentan hacer para resolverlos. Santa Fe II es una guía en la senda que deben de seguir.

Comité de Santa Fe: L. Francis Bouchey, Roger Fontaine, David C. Jordán, Lt. General Gordon Summer, Jr.

El texto de este documento ha sido tomado de Envío, No. 90, diciembre 1988-enero 1989, publicación mensual del Instituto Histórico Centroamericano con sede en Managua, Nicaragua.



Centro de Documentación de Honduras
CEDOH. Apartado Postal 1882, Tegucigalpa-HONDURAS Tel. 32-84-86

Adquiera los libros del **CEDOH**

EL CONFLICTO



DE BAJA INTENSIDAD

Tom Barry

UN NUEVO CAMPO DE BATALLA
EN CENTROAMERICA

CENTRO DE DOCUMENTACION DE HONDURAS
CEDOH

HONDURAS



Realidad Nacional
y
Crisis Regional

VARIOS AUTORES

CENTRO DE DOCUMENTACION DE HONDURAS
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA